



Presidencia
del Consejo de Ministros

Autoridad Nacional
del Servicio Civil

Tribunal del Servicio
Civil

“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres”

“Año del Diálogo y la Reconciliación Nacional”

RESOLUCIÓN Nº 002140-2018-SERVIR/TSC-Primera Sala

EXPEDIENTE : 4029-2018-SERVIR/TSC
IMPUGNANTE : ROBERT OSWALDO ZAVALETA RUIZ
ENTIDAD : GERENCIA REGIONAL DE EDUCACIÓN LA LIBERTAD
RÉGIMEN : LEY Nº 29944
MATERIA : RÉGIMEN DISCIPLINARIO
 CESE TEMPORAL POR TRES (3) MESES SIN GOCE DE REMUNERACIONES

SUMILLA: *Se declara **INFUNDADO** el recurso de apelación interpuesto por el señor **ROBERT OSWALDO ZAVALETA RUIZ** contra la Resolución Gerencial Regional Nº 004732-2018-GGR//GRSE, del 23 de julio de 2018, emitida por la Gerencia de la Gerencia Regional de Educación La Libertad, al haberse acreditado la comisión de la falta imputada.*

Lima, 29 de octubre de 2018

ANTECEDENTES

- Mediante Resolución Gerencial Regional Nº 002937-2018-GRLL-GGR/GRSE, del 4 de mayo de 2018, en base al Informe Nº 07-2018-GRELL-GGR/GRSE-CEPADD, la Gerencia Regional de Educación del Gobierno Regional La Libertad, en adelante la Entidad, inició procedimiento administrativo disciplinario al señor ROBERT OSWALDO ZAVALETA RUIZ, Director de la Unidad de Gestión Educativa Local Santiago de Chuco, en adelante el impugnante, por presuntamente infringir el numeral 5 del artículo 8º de la Ley Nº 27815 – Ley del Código de Ética de la Función Pública¹, al proferir insultos y amenazar de muerte a la profesora de iniciales P.R.Z.F., el día 7 de enero de 2018.

¹ **Ley Nº 27815 – Ley del Código de Ética de la Función pública**

“Artículo 8º.- Prohibiciones Éticas de la Función Pública

El servidor público está prohibido de:

(...)

5. Presionar, Amenazar y/o Acosar

Ejercer presiones, amenazas o acoso sexual contra otros servidores públicos o subordinados que puedan afectar la dignidad de la persona o inducir a la realización de acciones dolosas”.




Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado por el Tribunal del Servicio Civil, aplicando lo dispuesto por el Art. 25° del D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S. 028-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de la siguiente dirección web: <https://app.servir.gob.pe/verificacion/> ingresando el código de verificación que aparece en la parte superior izquierda de este documento.



“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres”
“Año del Diálogo y la Reconciliación Nacional”

2. El 29 de mayo de 2018, el impugnante presentó su descargo, de conformidad con lo siguiente:
 - (i) No se ha justificado que el presente caso sea de interés general.
 - (ii) Se ha vulnerado la debida motivación.
 - (iii) Se ha vulnerado el principio de tipicidad.
 - (iv) La agraviada de iniciales P.R.Z.F. se desistió de su denuncia.
 - (v) La llamada realizada del 7 de enero de 2018 fue realizada fuera del horario de trabajo.
3. A través de la Resolución Gerencial Regional N° 004732-2018-GGR//GRSE, del 23 de julio de 2018², el Titular de la Entidad impuso al impugnante la sanción de cese temporal por tres (3) meses sin goce de remuneraciones, al comprobarse su responsabilidad en la falta imputada.

TRÁMITE DEL RECURSO DE APELACIÓN

- 
- 
- 
4. Al no estar de acuerdo con la decisión de la Entidad, el 16 de agosto de 2018, el impugnante interpuso recurso de apelación contra la Resolución Gerencial Regional N° 004732-2018-GGR//GRSE, de conformidad con lo siguiente:
 - (i) No existen medios probatorios suficientes que acrediten su responsabilidad.
 - (ii) Se ha vulnerado el principio de tipicidad.
 - (iii) Se debió aplicar la Ley del Servicio Civil.
 - (iv) La conversación del 7 de enero de 2018 era de carácter privado.
 - (v) Se ha vulnerado los principios de razonabilidad y proporcionalidad.
 5. Con Oficios N°s 471 y 1048-2018-GRLL-GGR/GRSE-OAJ, la Entidad remitió al Tribunal del Servicio Civil, en adelante el Tribunal, el recurso de apelación presentado por el impugnante, así como los antecedentes que dieron origen al acto impugnado.
 6. A través de los Oficios N°s 14297 y 14298-2018-SERVIR/TSC, la Secretaría Técnica del Tribunal informó a la Entidad y al impugnante, respectivamente, que el recurso de apelación había sido admitido.

² Notificada al impugnante el 25 de julio de 2018.



Presidencia
del Consejo de Ministros

Autoridad Nacional
del Servicio Civil

Tribunal del Servicio
Civil

“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres”
“Año del Diálogo y la Reconciliación Nacional”

ANÁLISIS

De la competencia del Tribunal del Servicio Civil

7. De conformidad con el artículo 17º del Decreto Legislativo Nº 1023³, modificado por la Centésima Tercera Disposición Complementaria Final de la Ley Nº 29951 - Ley del Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2013⁴, el Tribunal tiene por función la resolución de controversias individuales que se susciten al interior del Sistema Administrativo de Gestión de Recursos Humanos, en las materias: acceso al servicio civil, evaluación y progresión en la carrera, régimen disciplinario y terminación de la relación de trabajo; siendo la última instancia administrativa.
8. Asimismo, conforme a lo señalado en el fundamento jurídico 23 de la Resolución de Sala Plena Nº 001-2010-SERVIR/TSC⁵, precedente de observancia obligatoria sobre competencia temporal, el Tribunal es competente para conocer en segunda y última instancia administrativa los recursos de apelación que sean presentados ante las entidades a partir del 15 de enero de 2010, siempre y cuando, versen sobre las materias establecidas descritas en el numeral anterior.

³ **Decreto Legislativo Nº 1023 - Decreto Legislativo que crea la Autoridad Nacional del Servicio Civil, Rectora del Sistema Administrativo de Gestión de Recursos Humanos**

“Artículo 17º.- Tribunal del Servicio Civil

El Tribunal del Servicio Civil - el Tribunal, en lo sucesivo - es un órgano integrante de la Autoridad que tiene por función la resolución de controversias individuales que se susciten al interior del Sistema.

El Tribunal es un órgano con independencia técnica para resolver en las materias de su competencia. Conoce recursos de apelación en materia de:

- a) Acceso al servicio civil;
- b) Pago de retribuciones;
- c) Evaluación y progresión en la carrera;
- d) Régimen disciplinario; y,
- e) Terminación de la relación de trabajo.

El Tribunal constituye última instancia administrativa. Sus resoluciones podrán ser impugnadas únicamente ante la Corte Superior a través de la acción contencioso administrativa.

Por decreto supremo refrendado por el Presidente del Consejo de Ministros, previa opinión favorable de la Autoridad, se aprobarán las normas de procedimiento del Tribunal”.

⁴ **Ley Nº 29951 - Ley del Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2013**

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS FINALES

“CENTÉSIMA TERCERA.- Deróguese el literal b) del artículo 17 del Decreto Legislativo Nº 1023, Decreto Legislativo que crea la Autoridad Nacional del Servicio Civil, rectora del Sistema Administrativo de Gestión de Recursos Humanos”.

⁵ Publicada en el Diario Oficial El Peruano el 17 de agosto de 2010.



9. Sin embargo, cabe precisar que en el caso de las entidades del ámbito regional y local, el Tribunal únicamente es competente para conocer los recursos de apelación que correspondan a la materia de régimen disciplinario, en virtud a lo establecido en el artículo 90º de la Ley N° 30057 – Ley del Servicio Civil⁶, y el artículo 95º de su reglamento general, aprobado por Decreto Supremo N° 040-2014-PCM⁷; para aquellos recursos de apelación interpuestos a partir del 1 de julio de 2016, conforme al comunicado emitido por la Presidencia Ejecutiva de SERVIR y publicado en el Diario Oficial “El Peruano”⁸, en atención al acuerdo del Consejo Directivo de fecha 16 de junio del 2016⁹.

⁶ **Ley N° 30057 – Ley del Servicio Civil**

“Artículo 90º.- La suspensión y la destitución

La suspensión sin goce de remuneraciones se aplica hasta por un máximo de trescientos sesenta y cinco (365) días calendario previo procedimiento administrativo disciplinario. El número de días de suspensión es propuesto por el jefe inmediato y aprobado por el jefe de recursos humanos o quien haga sus veces, el cual puede modificar la sanción propuesta. La sanción se oficializa por resolución del jefe de recursos humanos o quien haga su veces. La apelación es resuelta por el Tribunal del Servicio Civil.

La destitución se aplica previo proceso administrativo disciplinario por el jefe de recursos humanos o quien haga sus veces. Es propuesta por el jefe de recursos humanos o quien haga sus veces y aprobada por el titular de la entidad pública, el cual puede modificar la sanción propuesta. Se oficializa por resolución del titular de la entidad pública. La apelación es resuelta por el Tribunal del Servicio Civil”.

⁷ **Reglamento de la Ley N° 30057, aprobado por Decreto Supremo N° 040-2014-PCM**

“Artículo 95º.- Competencia para el ejercicio de la potestad disciplinaria en segunda instancia

De conformidad con el artículo 17 del Decreto Legislativo N° 1023, que crea la Autoridad del Servicio Civil, rectora del sistema Administrativo de Gestión de Recursos Humanos, la autoridad competente para conocer y resolver el recurso de apelación en materia disciplinaria es el Tribunal del Servicio Civil, con excepción del recurso de apelación contra la sanción de amonestación escrita, que es conocida por el jefe de recursos humanos, según el artículo 89 de la Ley.

La resolución de dicho tribunal pronunciándose sobre el recurso de apelación agota la vía administrativa”.

⁸ El 1 de julio de 2016.

⁹ **Decreto Legislativo N° 1023 - Decreto Legislativo que crea la Autoridad Nacional del Servicio Civil, Rectora del Sistema Administrativo de Gestión de Recursos Humanos**

“Artículo 16º.- Funciones y atribuciones del Consejo Directivo Son funciones y atribuciones del Consejo Directivo:

- a) Expedir normas a través de Resoluciones y Directivas de carácter general;
- b) Aprobar la política general de la institución;
- c) Aprobar la organización interna de la Autoridad, dentro de los límites que señala la ley y el Reglamento de Organización y Funciones;
- d) Emitir interpretaciones y opiniones vinculantes en las materias comprendidas en el ámbito del sistema;
- e) Nombrar y remover al gerente de la entidad y aprobar los nombramientos y remociones de los demás cargos directivos;
- f) Nombrar, previo concurso público, aceptar la renuncia y remover a los vocales del Tribunal del Servicio Civil;

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado por el Tribunal del Servicio Civil, aplicando lo dispuesto por el Art. 25° del D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S. 028-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de la siguiente dirección web: <https://app.servir.gob.pe/verificacion/> ingresando el código de verificación que aparece en la parte superior izquierda de este documento.



“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres”
“Año del Diálogo y la Reconciliación Nacional”

10. Por tal razón, al ser el Tribunal el único órgano que resuelve la segunda y última instancia administrativa en vía de apelación en las materias de acceso al servicio civil, evaluación y progresión en la carrera, régimen disciplinario y terminación de la relación de trabajo, con la resolución del presente caso asume dicha competencia, pudiendo ser sus resoluciones impugnadas solamente ante el Poder Judicial.
11. En ese sentido, considerando que es deber de todo órgano decisor, en cautela del debido procedimiento, resolver la controversia puesta a su conocimiento según el mérito de lo actuado; y, habiéndose procedido a la admisión del recurso de apelación y valoración de los documentos y actuaciones que obran en el expediente, corresponde en esta etapa efectuar el análisis jurídico del recurso de apelación.

Del régimen disciplinario aplicable

12. De acuerdo a la información contenida en el expediente administrativo se advierte que el impugnante presta servicios bajo las disposiciones de la Ley N° 29944, por lo que esta Sala considera que son aplicables al presente caso la referida Ley y su Reglamento, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2013-ED, y cualquier otro documento de gestión por el cual se establezcan funciones, obligaciones, deberes y derechos para el personal de la Entidad.

Sobre el debido procedimiento administrativo

13. El numeral 3 del artículo 139° de la Constitución Política del Perú establece, como principio de la función jurisdiccional, la observancia del debido proceso y la tutela jurisdiccional. Al respecto, el Tribunal Constitucional ha señalado que estos principios “(...) *no sólo se limitan a las formalidades propias de un procedimiento judicial, sino que se extiende a los procedimientos administrativos sancionatorios. En efecto, el debido proceso está concebido como el cumplimiento de todas las garantías, requisitos y normas de orden público que deben observarse en las instancias procesales de todos los procedimientos, incluidos los administrativos, a*

- g) Aprobar la creación de Salas del Tribunal del Servicio Civil;
h) Proponer el Texto Único de Procedimientos Administrativos;
i) Supervisar la correcta ejecución técnica, administrativa, presupuestal y financiera de la institución;
j) Disponer la intervención de las Oficinas de Recursos Humanos de las entidades públicas; y
k) Las demás que se señalen en el Reglamento y otras normas de desarrollo del Sistema.”

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado por el Tribunal del Servicio Civil, aplicando lo dispuesto por el Art. 25° del D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S. 028-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de la siguiente dirección web: <https://app.servir.gob.pe/verificacion/> ingresando el código de verificación que aparece en la parte superior izquierda de este documento.



Presidencia
del Consejo de Ministros

Autoridad Nacional
del Servicio Civil

Tribunal del Servicio
Civil

“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres”
“Año del Diálogo y la Reconciliación Nacional”

*fin de que las personas estén en condiciones de defender adecuadamente sus derechos ante cualquier acto del Estado que pueda afectarlos (...)*¹⁰.

14. En el mismo sentido, el Tribunal Constitucional manifiesta que “(...) *en reiterada jurisprudencia, el Tribunal Constitucional ha sostenido que el derecho reconocido en la referida disposición “(...) no sólo tiene una dimensión, por así decirlo, “judicial”, sino que se extiende también a sede “administrativa” y, en general, como la Corte Interamericana de Derechos Humanos lo ha sostenido, a “cualquier órgano del Estado que ejerza funciones de carácter materialmente jurisdiccional (el que) tiene la obligación de adoptar resoluciones apegadas a las garantías del debido proceso legal, en los términos del artículo 8º de la Convención Americana (...)”*¹¹.
15. Por su parte, la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, establece como principio del procedimiento administrativo, entre otros, el debido procedimiento¹², por el cual los administrados tienen derecho a la defensa (exponer sus argumentos, ofrecer y producir pruebas), y a una decisión debidamente motivada y fundamentada.
16. En el caso de los procedimientos administrativos disciplinarios, como el que concita el presente análisis, la exigencia del respeto irrestricto de tales derechos y garantías adquiere una dimensión mayor, toda vez que en ellos “los derechos de los administrados son más profundamente influidos por la decisión de la Administración”¹³. Así, el Tribunal Constitucional ha expresado que: “*los poderes públicos, en general, tienen un deber especial de protección de los derechos*

¹⁰Fundamento 2 de la Sentencia emitida en el expediente Nº 02678-2004-AA.

¹¹Fundamento 3 de la sentencia emitida en el expediente Nº 2659-2003-AA/TC.

¹²**Ley Nº 27444 - Ley de Procedimiento Administrativo General**

TÍTULO PRELIMINAR

“Artículo IV.- Principios del procedimiento administrativo

1. El procedimiento administrativo se sustenta fundamentalmente en los siguientes principios, sin perjuicio de la vigencia de otros principios generales del Derecho Administrativo:
(...)

1.2. Principio del debido procedimiento.- Los administrados gozan de todos los derechos y garantías inherentes al debido procedimiento administrativo, que comprende el derecho a exponer sus argumentos, a ofrecer y producir pruebas y a obtener una decisión motivada y fundada en derecho. La institución del debido procedimiento administrativo se rige por los principios del Derecho Administrativo. La regulación propia del Derecho Procesal Civil es aplicable sólo en cuanto sea compatible con el régimen administrativo. (...).”

¹³RUBIO CORREA, Marcial. *El Estado Peruano según la jurisprudencia del Tribunal Constitucional*. Lima: 2006, Fondo Editorial de la Pontificia Universidad Católica del Perú. p. 220.



“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres”
“Año del Diálogo y la Reconciliación Nacional”

fundamentales de la persona. Tal deber de protección exige la actuación positiva de aquéllos. Tratándose de órganos administrativos, tal función comprende todas aquellas actuaciones positivas que la Constitución o las leyes le atribuyen para la protección de los derechos fundamentales, tanto frente a actos del propio Estado como respecto a los provenientes de particulares. En consecuencia, si un órgano administrativo omite el cumplimiento de la actuación positiva destinada a la protección de derechos fundamentales de la persona frente a actos del propio Estado o de particulares, habrá incurrido en la omisión de su deber de protección de derechos fundamentales y, en consecuencia, los habrá afectado”. [Exp. N° 5637-2006-PA/TC FJ 11]¹⁴.

17. Asimismo, el Tribunal Constitucional ha manifestado, con relación al debido procedimiento, que el mismo “(...) no solo tiene una dimensión, por así decirlo, “judicial”, sino que se extiende también a sede “administrativa” y, en general, como la Corte Interamericana de Derechos Humanos lo ha sostenido, a “cualquier órgano del Estado que ejerza funciones de carácter materialmente jurisdiccional (el que tiene la obligación de adoptar resoluciones apegadas a las garantías del debido proceso legal, en los términos del artículo 8° de la Convención Americana (...))”¹⁵.
18. Finalmente, respecto al ejercicio de la potestad administrativa disciplinaria, debe decirse que el Tribunal Constitucional también ha emitido pronunciamiento señalando que “(...) está condicionada, en cuanto a su propia validez, al respeto de la Constitución, los principios constitucionales y, en particular de la observancia de los derechos fundamentales. Al respecto, debe resaltarse la vinculatoriedad de la Administración en la prosecución de procedimientos administrativos disciplinarios, al irrestricto respeto del derecho al debido proceso y, en consecuencia, de los derechos fundamentales procesales y de los principios constitucionales (v.gr. legalidad, razonabilidad, proporcionalidad, interdicción de la arbitrariedad) que lo conforman”¹⁶.
19. Por lo que se puede concluir que las entidades públicas, al hacer ejercicio de su potestad sancionadora, están obligadas a respetar el debido procedimiento administrativo, de lo contrario el acto administrativo emitido soslayando tal derecho carecería de validez.

¹⁴Fundamento 11 de la sentencia emitida en el expediente N° 5637-2006-PA/TC.

¹⁵Fundamento 3 de la sentencia emitida en el expediente N° 2659-2003-AA/TC.

¹⁶Fundamento 6 de la sentencia emitida en el Expediente N° 1003-98-AA/TC.



Presidencia
del Consejo de Ministros

Autoridad Nacional
del Servicio Civil

Tribunal del Servicio
Civil

“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres”
“Año del Diálogo y la Reconciliación Nacional”

20. En el presente caso, el impugnante alega que el informe oral que rindió fue programado después de que el órgano sancionador decidiera su destitución, lo cual viciaría el procedimiento. Sin embargo, de la Constancia de Informe Oral del 22 de noviembre de 2016, se aprecia que este se rindió antes de que el órgano sancionador, en este caso la Dirección de Programa Sectorial II de la Entidad, adoptara su decisión, contenida en la resolución impugnada del 23 de noviembre de 2016. Por lo tanto, este argumento del impugnante debe ser desestimado.

Sobre la debida motivación

21. De los argumentos expuestos por el impugnante en su recurso de apelación ha manifestado que la sanción no se encuentran debidamente motivadas, debido a que no se fue justificada adecuadamente ni se valoró debidamente los argumentos de defensa y pruebas aportadas.
22. Respecto a la debida motivación de los actos administrativos, conviene mencionar que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 3º del Texto único Ordenado de la Ley Nº 27444 – Ley del Procedimiento Administrativo General Ley Nº 27444, en adelante TUO de la Ley Nº 27444¹⁷, este constituye un requisito de validez del acto que se sustenta en la necesidad de *“permitir apreciar su grado de legitimidad y limitar la arbitrariedad en la actuación pública”*¹⁸.
23. El incumplimiento del deber de motivación del acto administrativo comprende dos supuestos principales: la carencia absoluta de motivación y la existencia de una motivación insuficiente o parcial. En el segundo caso, por tratarse de un vicio no trascendente, prevalece la conservación del acto a la que hace referencia el artículo 14º del TUO de la Ley Nº 27444¹⁹. En el primero, al no encontrarse incluido en dicho

¹⁷**Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27444 - Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo Nº 006-2017-JUS**

“Artículo 3º.- Requisitos de validez de los actos administrativos

Son requisitos de validez de los actos administrativos: (...)

4. Motivación.- El acto administrativo debe estar debidamente motivado en proporción al contenido y conforme al ordenamiento jurídico”.

¹⁸MORÓN Urbina, Juan (2009) *Comentarios a la Ley del Procedimiento Administrativo General*. Octava Edición. Lima, Gaceta Jurídica. p. 157.

¹⁹**Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27444 – Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo Nº 006-2017-JUS**

“Artículo 14º.- Conservación del acto

14.1 Cuando el vicio del acto administrativo por el incumplimiento a sus elementos de validez, no sea trascendente, prevalece la conservación del acto, procediéndose a su enmienda por la propia



“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres”
“Año del Diálogo y la Reconciliación Nacional”

supuesto, el efecto es la nulidad de pleno derecho del acto administrativo, de conformidad con lo dispuesto por el numeral 2 del artículo 10º del mismo TUO²⁰.

24. Ahora bien, el artículo 6º del TUO de la Ley Nº 27444, precisa que la motivación del acto administrativo debe ser expresa *“mediante la relación concreta y directa de los hechos probados relevantes del caso específico”* y la exposición de las razones jurídicas y normativas que justifican el acto emitido; no siendo admisibles como motivación, las fórmulas generales, vacías de fundamento, oscuras o que por su vaguedad no resulten esclarecedoras para la motivación del acto.
25. De otro lado, es necesario considerar que la exigencia de motivación de las resoluciones administrativas ha sido materia de pronunciamiento expreso del Tribunal Constitucional, que ha precisado su finalidad esencial del siguiente modo:

“La motivación supone la exteriorización obligatoria de las razones que sirven de sustento a una resolución de la Administración, siendo un mecanismo que permite apreciar su grado de legitimidad y limitar la arbitrariedad de su actuación”²¹.

26. En tal sentido, en la interpretación del Tribunal Constitucional:

“Un acto administrativo dictado al amparo de una potestad discrecional legalmente establecida resulta arbitrario cuando sólo expresa la apreciación individual de quien ejerce la competencia administrativa, o cuando el órgano administrativo, al adoptar la decisión, no motiva o expresa las razones que lo han conducido a adoptar tal decisión. De modo que, como ya se ha dicho, motivar una decisión no sólo significa expresar únicamente al amparo de qué norma legal se expide el acto administrativo, sino, fundamentalmente exponer las razones de hecho y el sustento jurídico que justifican la decisión tomada”²².

autoridad emisora.

14.2 Son actos administrativos afectados por vicios no trascendentes, los siguientes: (...)

14.2.2 El acto emitido con una motivación insuficiente o parcial. (...).”

²⁰**Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27444 – Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo Nº 006-2017-JUS**

“Artículo 10º.- Causales de nulidad

Son vicios del acto administrativo, que causan su nulidad de pleno derecho, los siguientes: (...)

2. El defecto o la omisión de alguno de sus requisitos de validez, salvo que se presente alguno de los supuestos de conservación del acto a que se refiere el Artículo 14. (...)”.

²¹Sentencia recaída en el Expediente Nº 4289-2004-AA/TC, Fundamento Noveno.

²²Sentencia recaída en el Expediente Nº 0090-2004-AA/TC, Fundamento Trigésimo Cuarto.

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado por el Tribunal del Servicio Civil, aplicando lo dispuesto por el Art. 25º del D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S. 028-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de la siguiente dirección web: <https://app.servir.gob.pe/verificacion/> ingresando el código de verificación que aparece en la parte superior izquierda de este documento.



“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres”
“Año del Diálogo y la Reconciliación Nacional”

27. Finalmente, el Tribunal Constitucional también ha señalado, respecto a los límites de la potestad administrativa disciplinaria, que: *“(…) está condicionada, en cuanto a su propia validez, al respecto de la Constitución, los principios constitucionales y, en particular de la observancia de los derechos fundamentales. Al respecto, debe resaltarse la vinculatoriedad de la Administración en la prosecución de procedimientos administrativos disciplinarios, al irrestricto respeto del derecho al debido proceso y, en consecuencia, de los derechos fundamentales procesales y de los principios constitucionales (v.gr. legalidad, razonabilidad, proporcionalidad, interdicción de la arbitrariedad) que lo conforman”*²³.
28. Cabe acotar que el numeral 6.2 del artículo 6º del TUO de la Ley Nº 27444, establece que los actos administrativos pueden motivarse mediante la declaración de conformidad con los fundamentos y conclusiones de anteriores dictámenes, decisiones o informes obrantes en el expediente, a condición de que se les identifique de modo certero, y que por esta situación constituyan parte integrante del respectivo acto.
29. Por lo tanto, se puede concluir que las entidades públicas al hacer ejercicio de su potestad sancionadora están obligadas a respetar el debido procedimiento administrativo y el deber de motivación, de lo contrario el acto administrativo emitido soslayando tales derechos carecería de validez.
30. Luego de notificada la Resolución Gerencial Regional Nº 002937-2018-GRLL-GGR/GRSE, con la cual se instauró procedimiento administrativo disciplinario, presentado sus descargos pertinentes por parte del impugnante, la Entidad emitió la Resolución Gerencial Regional Nº 004732-2018-GGR/GRSE, determinando que sí existió responsabilidad disciplinaria por parte del impugnante.
31. Cabe precisar que, en la Resolución Gerencial Regional Nº 004732-2018-GGR/GRSE se citó textualmente los principales argumentos de defensa del impugnante, los cuales fueron desvirtuados de forma específica por la Entidad, quien bajo su propio criterio no los consideró suficientes para eximir de responsabilidad por estos hechos.
32. Por lo tanto, el agravio alegado por el impugnante respecto de la debida motivación se vinculan con aspectos de fondo, y no así con el contenido del derecho a la motivación de resoluciones como parte del debido proceso, mérito por el cual este extremo del recurso de apelación no puede ser amparado.

²³Fundamento 6 de la sentencia emitida en el expediente Nº 1003-98-AA/TC.



“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres”
“Año del Diálogo y la Reconciliación Nacional”

Sobre el principio de tipicidad

33. En relación al principio de tipicidad, el numeral 4 del artículo 246º del TUO de la Ley N° 27444 establece que sólo constituyen conductas sancionables administrativamente las infracciones previstas expresamente en normas con rango de ley mediante su tipificación como tales, sin admitir interpretación extensiva u análoga.
34. Por lo tanto, las entidades sólo podrán sancionar la comisión de conductas que hayan sido previamente tipificadas como ilícitas, mediante normas que describan de manera clara y específica el supuesto de hecho infractor y la sanción aplicable²⁴.
35. En ese orden de ideas, respecto al principio de legalidad y tipicidad, el Tribunal Constitucional ha señalado que *“(…) el primero, se satisface cuando se cumple con la previsión de las infracciones y sanciones en la ley, mientras que el segundo, se constituye como la precisa definición de la conducta que la ley considera como falta, resultando éste el límite que se impone al legislador penal o administrativo, a efectos de que las prohibiciones que definen sanciones, sean éstas penales o administrativas, estén redactadas con un nivel de precisión suficiente que permita comprender sin dificultad lo que se está proscribiendo bajo amenaza de sanción de una determinada disposición legal”*²⁵.
36. En referencia al principio de tipicidad, y conforme a lo señalado en el numeral 1 de la presente resolución, se advierte que con la Resolución Gerencial Regional N° 002937-2018-GRLL-GGR/GRSE se abrió instrucción al impugnante, al incurrir en la prohibición regulada en el numeral 5 del artículo 8º de la Ley N° 27815 - Ley del Código de Ética de la Función Pública.
37. Asimismo, mediante Resolución Gerencial Regional N° 004732-2018-GGR/GRSE, se sancionó al impugnante con suspensión sin goce de remuneraciones, al haberse acreditado los hechos y las infracciones imputados con la Resolución Gerencial Regional N° 002937-2018-GRLL-GGR/GRSE.
38. En tal sentido, se advierte que la Entidad precisó la imputación referida a las vulneraciones a los principios, deberes y prohibiciones de la Ley del Código de Ética

²⁴VERGARAY, Verónica y GÓMEZ APAC, Hugo, “La Potestad Sancionadora y los Principios del Derecho Sancionador”. *Sobre la Ley del Procedimiento Administrativo General, Libro Homenaje a José Alberto Bustamante Belaunde*, Lima: 2009, Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, p. 403.

²⁵Fundamento 11º de la Sentencia emitida en el expediente N° 06301-2006-AA/TC.



Presidencia
del Consejo de Ministros

Autoridad Nacional
del Servicio Civil

Tribunal del Servicio
Civil

“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres”
“Año del Diálogo y la Reconciliación Nacional”

de la Función Pública. Asimismo, cabe precisar que de forma expresa la Entidad imputó al impugnante los hechos relativos a improperios y falta de respeto contra la profesora de iniciales P.R.Z.F.

Sobre la falta imputada y los argumentos de defensa del impugnante

39. Como se ha expuesto en los antecedentes de la presente resolución, se ha imputado al impugnante haber transgredido la prohibición referida a: *“ejercer presiones, amenazas o acoso sexual contra otros servidores públicos o subordinados que puedan afectar la dignidad de la persona o inducir a la realización de acciones dolosas”*. Esto luego de que fuera denunciado por la profesora de iniciales P.R.Z.F., al proferir insultos y amenazar de muerte el día 7 de enero de 2018.
40. En ese sentido, con relación a la prohibición imputada, este Tribunal considera necesario aclarar previamente que la misma no se restringe únicamente a supuestos en los que el destinatario de la conducta (presiones, amenazas o acoso sexual) sea un servidor público o alguien que mantiene un vínculo laboral con la Administración Pública, y como tal esté subordinado. Admitir una interpretación así implicaría desconocer aquellos casos en los que aun cuando no hay vínculo de naturaleza laboral, una persona se encuentra en una posición de subordinación respecto a un servidor público; como ocurre, por ejemplo, entre un trabajador y un practicante a su cargo, o entre docentes y alumnos.
41. Así pues, la interpretación dada a la prohibición ética indicada es en términos amplios, entendiéndose aplicable a toda persona que ejerza función pública, independientemente de la denominación de su vínculo. Por lo tanto, este Tribunal considera que el hecho imputado al impugnante se subsume en la prohibición invocada por la Entidad, por lo que corresponde ahora determinar si está debidamente acreditada su responsabilidad en el hecho.
42. Siendo así, en el presente caso tenemos que el impugnante realizó una llamada telefónica a la la profesora de iniciales P.R.Z.F., el día 7 de enero de 2018, a través del número de celular 998...5, a las 20:01 horas, en donde se propiciaron insultos y amenazas por parte del impugnante, debido a que la denunciante habría presuntamente hablado mal del profesor y dicho que estaba involucrada en la elaboración de pasquines en contra de su gestión como director de la UGEL Santiago de Chuco.

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado por el Tribunal del Servicio Civil, aplicando lo dispuesto por el Art. 25° del D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S. 028-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de la siguiente dirección web: <https://app.servir.gob.pe/verificacion/> ingresando el código de verificación que aparece en la parte superior izquierda de este documento.



“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres”
“Año del Diálogo y la Reconciliación Nacional”

43. Sobre el particular, obra en el expediente el Acta de Audiencia de Prefectura – Expediente N° 025-2018-PREG, del 9 de febrero de 2018, suscrito por el impugnante y la profesora de de iniciales P.R.Z.F., en el cual se indicó lo siguiente:

“(…) fue un domingo 7 de enero estaba en mi casa en reunión con mi familia, y recibí una llamada del doctor Zavaleta Ruiz Robert Oswaldo, hago hincapié a que el día sábado (día anterior) también me estuvo llamando pero no conteste. En la conversación telefónica me expreso que le han llamado personas diciendo que yo estoy hablando de el, a la vez le doy a conocer que por mi parte no tengo motivo para hablar de su persona, es ahí donde el me dice con palabra grotescas (mentada de madre, pobre que te metas conmigo te vas a cagar, tú no sabes quién soy) yo recalco en el audio y el cargo que el tiene y que entonces voy a pedir garantías frente a su acción de amenaza, no contento con ello se expresó (cachera de mierda yo le voy a decir a lindo (mi actual pareja) y nuevamente aludiendo me dijo te voy a mandar a matar) esa fue la conversación. Yo lo que quiero es que me deje tranquila que el poder no le va a durar toda la vida y que muchas injusticias he soportado en el trabajo (...).

Acto quien seguido, se concede el uso de la palabra ZVALETA RUIZ ROBERT OSWALDO (...), quien manifiesta: (...) De la llamada es cierto que si la llame, este audio está editado en 4 partes, durante la conversación recibí insultos que no están en el audio porque este esta editado, la profesora dice que tiene que ver con la denuncia. Referente a los videos es natural responder y los dos nos insultamos. Yo niego que he amenazado porque ha sido inducido, porque dice me amenazas me estas amenazando me repetía esto en varias oportunidades. (...). Si hubo un exabrupto en la conversación es porque varias personas me han informado que la denunciante se expresa de improprios de mi persona difamándome y hablando mal de mí y quizás ese es el motivo de alguna grosería que está en el audio. (...) Ofrezco disculpas si existió una agresión verbal de mi parte entendiendo que somos personas humanas y tenemos emociones como alegrías, tristezas y también cólera al margen der cargo que uno ocupe y que esta conversación ha sido provocada ya que reitero el audio ha sido editado y no aparecen los insultos a mi persona, sigue siendo persona humana (...).

44. Tal como podemos observar, el propio impugnante ha reconocido que se expresó con improprios hacia la profesora de iniciales P.R.Z.F., faltándole el respeto e insultándole por presuntos dichos que la referida profesora habría comentado con otros servidores de la Institución Educativa. Asimismo, dichas aseveraciones fueron confirmadas en el recurso de apelación, en el cual, el impugnante señaló:

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado por el Tribunal del Servicio Civil, aplicando lo dispuesto por el Art. 25° del D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S. 028-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de la siguiente dirección web: <https://app.servir.gob.pe/verificacion/> ingresando el código de verificación que aparece en la parte superior izquierda de este documento.



“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres”
“Año del Diálogo y la Reconciliación Nacional”

“En segundo orden, el hecho de haber tenido un intercambio de palabras, que dicho sea LO ASUMO CON TOTAL RESPONSABILIDAD, donde se pusieron de manifiesto situaciones absolutamente personales, fue la propia interesada la que las hizo públicas e hizo público un audio donde se editó solamente ese intercambio de palabras y no el íntegro de la conversación (situación que debió exigirse en la investigación)”.

45. Ante ese contexto, no cabe duda para este Tribunal que la conducta desplegada por el impugnante hacia la profesora de iniciales P.R.Z.F. configuraba ejercicio de presiones indebidas que atentaban contra la dignidad de la profesora agraviada, siendo esta una situación prohibida en términos éticos.
46. Sin perjuicio de lo anterior, como argumento de defensa, el impugnante señala que la llamada fue realizada un día domingo y tuvo un carácter privado. Al respecto, si bien la llamada fue realizada fuera de las instalaciones de la Entidad, lo cierto es que el contenido de la misma trata sobre dichos relacionados con el desempeño de funciones, tanto del impugnante como de la profesora de iniciales P.R.Z.F. Asimismo, la prohibición ética imputada se configura cuando un funcionario público comete actos contrarios a la dignidad de otro funcionario, independientemente del día que se realicen los hechos, por lo que, a consideración de esta Sala, la situaciones descritas por el impugnante no son eximentes de responsabilidad.
47. Por otro lado, el impugnante señala que la profesora de iniciales P.R.Z.F. se desistió de su denuncia, por lo que no debió iniciarse acciones disciplinarias administrativas en su contra. Sobre el particular, debemos tener en consideración el artículo 26º de la Normas que Regulan el Proceso Administrativo Disciplinario para Profesores en el Sector Público, aprobada mediante Resolución Viceministerial Nº 091-2015-MINEDU:

“Artículo 26º.- PRESENTACIÓN Y CALIFICACIÓN DE LA DENUNCIA

1. Cualquier persona que considere que un profesor ha cometido una falta disciplinaria, puede formular su denuncia correspondiente, debiendo exponer claramente los hechos denunciados, identificando al presunto responsable y adjuntando u ofreciendo las pruebas pertinentes. El denunciante es un tercero colaborador de la Administración Pública, no siendo parte del proceso administrativo disciplinario; su desistimiento tiene nula implicancia en la continuación de la investigación de los hechos denunciados”.

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado por el Tribunal del Servicio Civil, aplicando lo dispuesto por el Art. 25° del D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S. 028-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de la siguiente dirección web: <https://app.servir.gob.pe/verificacion/> ingresando el código de verificación que aparece en la parte superior izquierda de este documento.



Presidencia
del Consejo de Ministros

Autoridad Nacional
del Servicio Civil

Tribunal del Servicio
Civil

“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres”
“Año del Diálogo y la Reconciliación Nacional”

Tal como podemos observar, para el presente procedimiento administrativo disciplinario, así la profesora de iniciales P.R.Z.F. se haya desistido de su denuncia, dicha situación resulta irrelevante, teniendo la Entidad la autoridad suficiente para continuar con la acción disciplinaria, por lo que, el argumento de defensa del impugnante ha quedado desvirtuado.

48. Por último, el impugnante indica que debió aplicarse la Ley del Servicio Civil. Sin embargo, resulta pertinente precisar que el Reglamento de la Ley N° 29944, ha sido modificado por el Decreto Supremo N° 005-2017-MINEDU, y publicado en el Diario Oficial “El Peruano” el 19 de mayo de 2017, de acuerdo a lo siguiente:

“Artículo 107º.- Del proceso administrativo disciplinario por infracciones al Código de Ética de la Función Pública

El proceso administrativo disciplinario por infracciones a la Ley N° 27815 - Ley del Código de Ética de la Función Pública, está a cargo de las Comisiones reguladas en los artículos 91 y 92 del presente Reglamento y se lleva a cabo conforme a las reglas sustantivas y procedimentales de la Ley de Reforma Magisterial y el presente Reglamento”.

En consecuencia, resulta plenamente aplicable al presente caso el Código de Ética de la Función Pública y las reglas procedimentales de la Ley de Reforma Magisterial, por lo que, no existe vulneración al principio de legalidad ni al debido procedimiento.

49. Por lo tanto, esta Sala considera que está debidamente acreditada la responsabilidad del impugnante en el hecho imputado, esto es, impropiedades y falta de respeto a otra funcionaria pública, por lo que su recurso de apelación debe ser desestimado, correspondiendo que se confirme la sanción impuesta.

En ejercicio de las facultades previstas en el artículo 17º del Decreto Legislativo N° 1023, la Primera Sala del Tribunal de Servicio Civil;

RESUELVE:

PRIMERO.- Declarar INFUNDADO el recurso de apelación interpuesto por el señor ROBERT OSWALDO ZAVALETA RUIZ contra la Resolución Gerencial Regional N° 004732-2018-GGR//GRSE, del 23 de julio de 2018, emitida por la Gerencia de la GERENCIA REGIONAL DE EDUCACIÓN LA LIBERTAD; por lo que se CONFIRMA la citada resolución.

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado por el Tribunal del Servicio Civil, aplicando lo dispuesto por el Art. 25° del D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S. 028-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de la siguiente dirección web: <https://app.servir.gob.pe/verificacion/> ingresando el código de verificación que aparece en la parte superior izquierda de este documento.

www.servir.gob.pe

Jirón Mariscal Miller 1153 - 1157
Jesús María, 15072 - Perú
T: 51-1-2063370



Presidencia
del Consejo de Ministros

Autoridad Nacional
del Servicio Civil

Tribunal del Servicio
Civil

“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres”
“Año del Diálogo y la Reconciliación Nacional”

SEGUNDO.- Notificar la presente resolución al señor ROBERT OSWALDO ZA VALETA RUIZ y a la GERENCIA REGIONAL DE EDUCACIÓN LA LIBERTAD, para su cumplimiento y fines pertinentes.

TERCERO.- Devolver el expediente a la GERENCIA REGIONAL DE EDUCACIÓN LA LIBERTAD.

CUARTO.- Declarar agotada la vía administrativa debido a que el Tribunal del Servicio Civil constituye última instancia administrativa.

QUINTO.- Disponer la publicación de la presente Resolución en el Portal Institucional (www.servir.gob.pe).

Regístrese, comuníquese y publíquese.



RICARDO JAVIER
HERRERA VÁSQUEZ
VOCAL



LUIGINO PILOTTO
CARREÑO
PRESIDENTE



OSCAR ENRIQUE
GÓMEZ CASTRO
VOCAL

L4/P5

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado por el Tribunal del Servicio Civil, aplicando lo dispuesto por el Art. 25° del D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S. 028-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de la siguiente dirección web: <https://app.servir.gob.pe/verificacion/> ingresando el código de verificación que aparece en la parte superior izquierda de este documento.

www.servir.gob.pe

Jirón Mariscal Miller 1153 - 1157
Jesús María, 15072 - Perú
T: 51-1-2063370